

# ***Ecuador. La realidad de una fantasía***

**Acosta, Alberto**

---

**Alberto Acosta:** Economista ecuatoriano. Autor de varias publicaciones sobre su especialidad. Secretario ejecutivo del Grupo de Trabajo sobre Deuda Externa y Desarrollo (FONDAD).

---

Ecuador no es una excepción en América Latina. Al igual que en otros países - Perú y Venezuela, por ejemplo -, también aquí alcanzó el poder un partido de la Internacional Socialista. Su llegada al gobierno, con un candidato que ya había intentado sin éxito ser presidente en 1978 y 1984, tuvo como trasfondo un programa y un discurso socialdemócratas.

Su punto de partida - agosto de 1988 - estuvo signado por un marcado desconcierto económico, una situación de moratoria con la banca privada internacional, un notable índice de corrupción a todos los niveles y una sensación de inseguridad en amplios sectores de la sociedad, factores todos estos derivados del autoritario gobierno de la derecha socialcristiana que lo precedió.

Las expectativas generadas por el nuevo gobierno eran grandes. No sólo porque los problemas habían llegado a un límite que parecía insostenible, sino porque había una clara aspiración a superar los atropellos socialcristianos y porque se esperaba, pese a las ya conocidas limitaciones de la socialdemocracia ecuatoriana que no tardaron en aparecer, la aplicación de una política económica y social que redistribuyera de alguna manera el peso de la crisis. «El nuevo gobierno se encuadra en un proyecto eminentemente reformista, con los límites y alcances que esto pueda implicar»<sup>1</sup>, era para entonces un criterio bastante generalizado. Sin embargo, como sucediera en casi todos los otros países latinoamericanos que asistieron a experimentos socialdemócratas, esta expectativa que debió contribuir al triunfo electoral de la Izquierda Democrática (ID) sobre el populismo, empezó prontamente a desvanecerse.

La socialdemocracia había logrado una importante victoria a nivel nacional, contaba con una mayoritaria presencia en un apreciable número de gobiernos seccionales, controlaba los aparatos jurisdiccional y legislativo y muchos estamentos de la sociedad. Sin embargo, buscó desde la primera hora ampliar aun más su base polí-

---

<sup>1</sup>Varios analistas compartían esta opinión. Ver Amparo Menéndez-Carrión: «La democracia en el Ecuador: desafíos, dilemas y perspectivas», documento de trabajo No. 3, FLACSO, Quito, 1988, pp. 17-27.

tica en una alianza con la democracia cristiana - Democracia Popular (DP) - que en el terreno legislativo se amplió también al pequeño partido comunista (Frente Amplio de Izquierda, FADI). Este acuerdo en ningún momento se sustentó en una alternativa económica - no se piensa en un esquema reformista profundo, menos aún revolucionario -, que partiera del análisis de lo que era posible y viable transformar en esa específica coyuntura nacional e internacional, y que ampliara los espacios democráticos formales.

Por el contrario, desde el inicio se transitó el sendero impuesto por las políticas neoliberales, ratificando una tendencia aperturista y liberalizadora que, por su esencia concentradora y excluyente, mantiene a los sectores mayoritarios de la sociedad ausentes de la definición de las grandes decisiones nacionales.

Se desdibujaron, pues, las expectativas económicas. Y no tardaron en hacerlo también las políticas. «Un estilo de 'hacer' gobierno nítidamente cortesano, de espaldas a los votantes y a las masas populares, (fue) impuesto» por parte de la nueva administración<sup>2</sup>.

### ***Un ajuste emergente que se convirtió en permanente***

Ante la gravedad de los problemas - muchos de ellos heredados de la administración precedente de León Febres Cordero la respuesta estatal se orientó, inicialmente con una estrategia de corto plazo, hacia la solución de los principales desequilibrios económicos. El Plan de Emergencia Económica Nacional apuntó a recuperar dichos desajustes, procurando asegurar la confianza y credibilidad de los sectores empresariales y dejando de lado las propuestas ideológicas y electorales de la ID.

Con miras a conseguir el respaldo activo de las politizadas cámaras de la producción y el apoyo pasivo de los grupos populares y laborales organizados, el gobierno impulsó un llamado a la «concertación social», que debía ser, según la interpretación oficial, el camino para enfrentar la crisis. Esta propuesta fracasó en sus orígenes. No tanto por las contradicciones entre los grupos sociales que habían sido invitados o por la falta de comprensión de la que entonces se quejó el gobierno, sino en particular porque se trataba de una convocatoria que excluía de entrada la posibilidad de discutir los objetivos y los lineamientos de la política económica impuesta desde arriba. El régimen se había limitado a presentar su estrategia de ajuste y a buscar apoyo para la misma, desvirtuando con ello la posibilidad de impul-

---

<sup>2</sup> Diego Cornejo Menacho: «Dos años de gobierno de Borja Cortesanos en palacio», Revista Ecuador Debate, CAAP, Quito, octubre de 1990, p.7.

sar una efectiva concertación. La propuesta apenas logró una relativa instrumentación ideológica y fue manipulada propagandísticamente para fortalecer en cierta medida a la débil democracia electoral.

El logro de los equilibrios macroeconómicos básicos se convirtió nuevamente en el principal propósito de la gestión económica y en un virtual sustituto del desarrollo económico y social, al cual se habría de llegar posteriormente - y en forma armónica y casi espontánea, según los argumentos gubernamentales como producto de la estabilización y el ajuste. Y el gran objetivo fue frenar la inflación.

En ese contexto, todo parecía contradecir el contenido básico de los postulados de la socialdemocracia, algunos de los cuales apenas si lograron plasmarse, durante 1989, en el «Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1989-1992»<sup>3</sup>. De hecho, los pilares del programa emergente adquirieron continuidad en el marco de una política definida como gradualista, pero que en su instrumentación no hizo sino combinar pequeños ajustes periódicos con medidas de shock.

#### ***No se pudo desatar el «nudo gordiano»\****

Al momento de inaugurar su mandato, el presidente Borja, sobre la base de lo que habían sido las posiciones programáticas de su partido y sus propias declaraciones electorales, reconoció que «no se trata de que no queremos pagar la deuda, se trata de que no podemos hacerlo en las condiciones en que nos la quieren cobrar nuestros acreedores»<sup>4</sup>.

Sin embargo, aun antes de iniciar su gestión ya habían empezado las conversaciones con la banca internacional. Una de sus primeras resoluciones fue refinanciar el pago de los intereses de la comisión de riesgo cambiario, ampliando los subsidios a los sectores privados que se endeudaron en el extranjero y que fueron beneficiarios de la «sucretización» que se inició cuando la democracia cristiana estaba en el poder. Hay que reconocer, sin embargo, que no se cedió a otras pretensiones de los «sucretizados». Por otro lado, ante la presión inflacionaria y frente al manejo poco regular que se había evidenciado, se suspendió el mecanismo de compra de cuentas especiales en divisas que había beneficiado al sector financiero y a una veintena de empresas nacionales y extranjeras.

<sup>3</sup>En él se incluían aspectos fundamentales de lo que habría sido una política económica de ajuste «con rostro humano» y con cierta orientación reformista, pero en la práctica no llegó a tener trascendencia alguna.

<sup>4</sup>Rodrigo Borja: «Mensaje de Paz y Unidad», 10 de agosto de 1988, Quito, pp. 30-32.

En los primeros meses se mantuvo la moratoria de la deuda con los bancos privados, producida por la incapacidad financiera del país. Y en ningún instante se trató de impulsar algún planteamiento alternativo. Por todos los medios se quería restablecer las relaciones con la banca acreedora. Este deseo se cristalizó a principios de 1989, cuando se resolvió hacer pagos simbólicos de los intereses de la deuda privada. El gobierno no quería arriesgar el financiamiento externo del Banco Mundial y del BID que esperaba recibir en los primeros dos años de gestión. Esta decisión casi coincidió con la presentación del Plan Brady, en marzo de 1989, cuyos potenciales beneficios se convirtieron en el objetivo gubernamental.

Una nueva «carta de intención», presentada en agosto de 1989 al FMI, fijó el curso de lo que sería el futuro manejo económico. En ella se insistió en la búsqueda del objetivo final: «Impulsar más la integración de la economía ecuatoriana a la economía mundial». A la «carta» no antecedieron ni siguieron ajustes traumáticos como en otras ocasiones, puesto que el crédito stand by fue concedido como reconocimiento a los esfuerzos oficiales que satisfacían en gran medida a los organismos internacionales.

A fines de 1989, una misión del Banco Mundial entregó una «Estrategia de Mediano Plazo-Documento de discusión» al gobierno. Para el organismo, «el programa de estabilización del Ecuador (estaba) entre los más exitosos programas recientemente implementados en América Latina» y en el documento recomendaba que «la política económica deberá cambiar su enfoque hacia el mediano plazo e implementar un programa de ajuste sostenido» para propugnar una mayor apertura de la economía ecuatoriana. Era el requisito para lograr «el crecimiento de las exportaciones o la reducción de la deuda» en el marco del Plan Brady.

Presentándolo como un espaldarazo a su estrategia económica, el gobierno difundió, en febrero de 1990, los detalles de su «Plan de Acción Económica» o «carta de desarrollo» enviada al Banco Mundial, así como los de la nueva «carta de intención» presentada al FMI<sup>5</sup>.

A pesar de los problemas surgidos en la renegociación de la deuda y del atropello que significó la incautación de 80 millones de dólares por parte del Citibank, en mayo de 1989, se consolidó la tendencia anterior<sup>6</sup>. El gobierno, interesado en man-

<sup>5</sup>A pesar de las reiteradas declaraciones de que la política económica era «soberana y autónoma», como decía el gobierno, la lectura de dichas «cartas» muestra semejanzas no sólo en su esencia, que es en definitiva lo que cuenta, sino en las repetidas coincidencias textuales de párrafos enteros con el «documento de discusión» entregado por el Banco Mundial.

<sup>6</sup>La política económica, y por supuesto las paralelas renegociaciones de la deuda externa, siguen enmarcadas dentro de los paradigmas vigentes de la corriente dominante: a la cola de las posiciones

tener el ambiente propicio para las conversaciones con la banca y por consideraciones diplomáticas, se contentó con protestas verbales que no consiguieron solución alguna.

Para completar el cuadro, como resultado directo del contenido de dichas «cartas», el gobierno presentó la propuesta para enfrentar el problema de la deuda externa: reducción de un 70% de la deuda o disminución de los intereses a un 2,5%, para determinar el servicio de acuerdo con la capacidad de pago, que no debería exceder el 30% de los intereses nominales a la banca privada. Sin embargo, la banca internacional tuvo otra opinión. Pese al cumplimiento de las «recomendaciones» formuladas por los organismos financieros, su contrapropuesta fue la de establecer un acuerdo parcial y de tiempo limitado para la solución del pago de los intereses atrasados. Luego se procedería a una renegociación global en el marco de los acuerdos logrados dentro de lo que se conoce como Plan Brady.

Pasados treinta meses de gobierno no se ha concretado la ansiada renegociación de la deuda. Ahora, el ingreso del país al círculo de los «beneficiarios» del Plan Brady podría viabilizarse si se cede a las presiones de los banqueros, que quieren obtener parte de los excedentes generados por el alza temporal que la crisis del Golfo Pérsico provocó en el precio del petróleo<sup>7</sup>.

De todas maneras, el gobierno ha pagado por lo menos el 30% de los intereses - 150 millones de dólares por año - adeudados a la banca privada internacional, aunque sin su aceptación expresa. El servicio de la deuda con los organismos internacionales y con los países acreedores, se mantiene en el marco de las regulaciones del Club de París, por un monto que gira alrededor de 1.200 millones de dólares anuales.<sup>8</sup>

Pocas semanas después de que el Presidente norteamericano lanzara la «Iniciativa para las Américas» en junio de 1990, Rodrigo Borja fue el primer mandatario latinoamericano en visitar Washington para apoyar esa propuesta. Allí enfocó el manejo de la deuda con Estados Unidos en forma bilateral, buscando respaldo a su

---

bilaterales de los países más grandes y, en definitiva, a la cola, en términos conceptuales, de las políticas económicas de los democristianos y de los socialcristianos... Con la socialdemocracia, es más, se llegó a un nivel mucho más profundo en esta nueva época fondomonetarista.

<sup>7</sup>Entre otros planteamientos, meses antes de que se produjera dicha crisis, los bancos exigían la transferencia trimestral del 50% de los ingresos generados por un precio del crudo que supere los 16, 50 dólares por barril.

<sup>8</sup>En total el servicio de la deuda representa un 60% de las exportaciones, pese a que el saldo neto de los nuevos desembolsos y el servicio de estas deudas con los organismos multilaterales ha sido negativo en estos años socialdemócratas.

política económica. El gobierno generó un ambiente de desbordado optimismo, compartido entusiastamente por los grupos de poder económico<sup>9</sup>.

### ***Las tribulaciones de la estabilización y el ajuste***

Durante estos treinta meses se ha mantenido una política restrictiva del crédito y una rigurosa programación de la emisión monetaria para regular el tipo de cambio y frenar la inflación. El manejo fiscal ha sido extremadamente austero, salvo durante los primeros meses de 1990 en que se flexibilizó dada la cercanía de las elecciones legislativas y seccionales.

Todo esto ha ahondado la recesión y las mismas medidas que buscaban establecer una mayor liberalidad lograron que la inflación se hiciera reacia al ajuste monetarista. En la práctica, se indexaron casi todos los precios de bienes y servicios de la economía: gasolina, dólar, tasas de interés, aceites, mantecas, gaseosas, pan, electricidad, transporte, teléfono, etc. No así los salarios, por supuesto.

La inflación - heredada del febreoscorderato - continuó su marcha ascendente hasta acercarse a casi el 100% anual en marzo de 1989, el nivel más alto de la historia. Hasta que se logró revertir esta tendencia: alcanzó un 54% en diciembre de ese año. Un logro que se opacó porque el gobierno, en un inoportuno ofrecimiento, se había propuesto reducir la inflación al 30% para esa fecha. Dicho sea de paso, el mismo ofrecimiento se hizo para 1990. Posteriormente, la inflación mantuvo un curso errático, revelando las debilidades de la política de estabilización. El año 1990 concluyó con una inflación de casi 50%, evidenciando una tendencia sin visos de solución dada la carencia de políticas productivas específicas y, naturalmente, la ninguna preocupación por enfrentar sus causas estructurales.

Los efectos del ajuste, el impacto psicológico de los confusos ofrecimientos gubernamentales y la inercia inflacionaria agudizaron el efecto de la pugna distributiva que, desde 1982, se ha resuelto en contra de trabajadores y empleados. Ellos han cargado con el peso de la crisis. Y al cabo de treinta meses de gobierno, se mantiene esta peligrosa proyección que agrava aún más las condiciones de vida de la mayoría de ecuatorianos. Es más, los 40 mil sucres de salario mínimo vital tienen un po-

---

<sup>9</sup>El canciller ecuatoriano, en un folletito promocional de su Ministerio, manifestó que la Iniciativa «representa un cambio significativo en la política exterior de los Estados Unidos y responde a un nuevo enfoque de las relaciones hemisféricas que, sin paternalismos y artificiales concepciones de ayuda, se basa en el interés mutuo y en la necesidad de adoptar acciones convergentes hacia objetivos comunes».

der adquisitivo muy inferior al que tenía el salario vigente en 1980. Para ponerlo en dólares, de 160 en 1980 se ha caído a unos 40 dólares en 1991<sup>10</sup>.

Los incrementos salariales no han cubierto la pérdida del poder adquisitivo<sup>11</sup> y en ocasiones se han producido en medio de públicas y contradictorias discusiones, que han exacerbado las expectativas y agudizado la especulación. El resultado ha sido, por lo tanto, desestimulante: por un lado se ha gestado una mayor inestabilidad e incertidumbre y, por otro, se ha generalizado el descontento social<sup>12</sup>. En suma, no se ha diseñado una política salarial activa que por lo menos logre devolver el poder adquisitivo a los salarios y nada se ha hecho para moderar el caos salarial imperante.<sup>13</sup>

En todo este tiempo, el gobierno no ha podido reformular y modernizar las relaciones en el sistema económico ni despertar la credibilidad necesaria para impulsar la reactivación de la economía. Por el contrario y aunque parezca contradictorio, ciertos grupos beneficiarios de esta estrategia transnacionalizadora han mantenido una actitud opositora al régimen.

Una de las primeras decisiones de agosto de 1988 fue la re incautación de casi todas las divisas y el retorno a las minidevaluaciones, cuya base se ha reajustado siete veces para mantener un tipo de cambio «real». Paralelamente, se aplicaron algunas medidas para revitalizar la Reserva Monetaria Internacional, que se encontraba en valores negativos en esa fecha. El incremento de los precios del petróleo hizo que alcanzara una cifra récord: 602 millones de dólares.

De esta forma, a medida que se superaba el estrangulamiento externo se eliminaron controles y restricciones a las importaciones hasta desembocar en una reforma arancelaria, cuya concepción entraña la profundización del proyecto de desarrollo

---

<sup>10</sup> Los sueldos y los salarios se deterioraron en un 14% en 1990, luego de caer en 9,4% en 1989 y en 23,4 en 1988. Sobre la política económica del gobierno socialdemócrata cf. Alberto Acosta: «Dos años de gobierno de Borja - Los límites del continuismo» en Revista Ecuador Debate, CAAP, Quito, Octubre de 1990.

<sup>11</sup> El primero de septiembre de 1988 y el primero de mayo de 1989 se revisaron los salarios. En 1990 no se produjo un ajuste del salario mínimo vital, sino sólo un aumento del conocido como décimo quinto sueldo. Recién iniciado enero de 1991, el gobierno decretó una nueva alza que fluctuó entre el 25 y el 37,5%. Valdría la pena recordar que a pocos días de producida el alza de los salarios, el 24 de enero de 1991 se aplicó un nuevo «paquetazo» económico manteniendo la combinación de medidas de shock y gradualismo.

<sup>12</sup> Desde que se inició este gobierno se han celebrado cuatro huelgas nacionales, la última como consecuencia de las medidas de enero de 1991.

<sup>13</sup> Al principio de la presente administración, la mayoría gobiernista consiguió que el Congreso Nacional delegara al Ejecutivo las facultades de conducir la política salarial como parte de su política económica. La decisión fue revocada en febrero de 1991 ante el creciente descontento popular.

«hacia afuera». La desgravación arancelaria no se limita simplemente a buscar una racionalización del sistema de aranceles o a incrementar los ingresos fiscales. Con ésta se sientan bases para garantizar un aperturismo mucho mayor: es la receta fondomonetarista para superar la crisis. Se establecen condiciones para que la economía compita casi inmediatamente, sin protección y casi sin orientación alguna en el mercado mundial, con la convicción de que ésta reaccionará de manera espontánea y satisfactoria ante el reto planteado.

En coincidencia con el deseo de readecuar la economía a las nuevas situaciones de escasez de recursos externos, las importaciones se han mantenido en márgenes limitados. La industria y algunas actividades agropecuarias que tienen una elevada dependencia de bienes de capital e insumos importados han sufrido el impacto de esta restricción inducida que, a su vez, deprimió la oferta de bienes. La debilitada actividad económica, que condujo igualmente a una disminución de la demanda interna por habitante, contribuyó a frenar las presiones sobre el sector externo y a generar excedentes en la balanza de pagos.

No obstante, la reducción de las actividades del Estado no tuvo como correlato un mayor dinamismo del sector privado y las menores importaciones de bienes e insumos necesarios para la producción tampoco pudieron equilibrarse con una mayor oferta doméstica: en estos treinta meses no ha habido políticas específicas para los sectores agrícola e industrial. El aparato productivo ha estado manejado indirectamente con medidas monetaristas y fiscalistas, con una carencia casi absoluta de reflexiones y propuestas de tipo estructural. Así, la economía ecuatoriana sólo logró una recuperación limitada en 1989 (0.5%) y en 1990 (1.5%). Un estancamiento, si se considera que el incremento de la población es del orden del 2.8%.

En lo que tiene que ver con la política cambiaria, que sigue siendo el pilar más importante para el fomento de las exportaciones, es preciso señalar que se mantuvieron las minidevaluaciones para sostener el tipo de cambio de intervención cercano al del mercado libre. Los mayores ingresos petroleros y en cierta medida el flujo sostenido de narcodólares han mantenido una relativa sobreoferta de divisas que ha garantizado cierta estabilidad en su cotización<sup>14</sup>.

A pesar de la decisión de fomentar las exportaciones e impulsar algunos sectores adicionales hacia el mercado externo - minería y turismo, especialmente -, no se ha logrado diseñar una estrategia global. La devaluación sigue funcionando como eje

---

<sup>14</sup>Según la revista Newsweek sólo en 1989 en Ecuador se habrían lavado narcodólares por un monto de 400 millones.

de la política aperturista. Y no está por demás señalar que los resultados han sido escasos respecto de las exportaciones no petroleras que ni siquiera han logrado diversificarse. Pasados casi 10 años de aplicación sostenida de esta estrategia, el petróleo es de lejos el principal rubro de exportación y los productos agrotropicales tradicionales son la base de las exportaciones no petroleras.

Adicionalmente, en Ecuador, al igual que en el resto de América Latina, uno de los elementos de las políticas de ajuste ha sido el fomento a las inversiones extranjeras directas. Pese a todas las concesiones, las inversiones extranjeras no han aparecido en los montos esperados, excepto en el sector petrolero. Con la expedición de leyes que contemplan el esquema de producción de la maquila, el establecimiento de zonas francas y los mecanismos de trabajo compartido - anteriormente combatidos por la socialdemocracia desde la oposición -, no sólo se busca mejorar las posibilidades de generación de empleo y estimular la utilización de la capacidad instalada ociosa, como reza la versión oficial, sino que se quiere flexibilizar el sistema laboral para aumentar la competitividad de la mano de obra (haciéndola cada vez más barata y flexible) y propiciar la repatriación de capitales como un atractivo adicional para los inversionistas extranjeros.

Todo este manejo económico ha sido contraproducente para superar la recesión y, sobre todo, ha agudizado uno de los problemas sociales más críticos: el desempleo y subempleo. El desempleo siguió creciendo al 1% anual, es decir, que habría alcanzado a casi un 16% de la población económicamente activa, sin que haya disminuido el subempleo.

El problema social ha estado presente sólo en el discurso. Los esfuerzos en ese campo, integrados en la propuesta de «pago de la deuda social», se han plasmado en algunos proyectos de carácter marginal.<sup>15</sup> En definitiva, la cuestión de la apropiación de los beneficios se ha resuelto con una mayor concentración de la riqueza dentro de un esquema de mayor liberalidad y apertura, complementado y orientado con la intervención del Estado.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>El gobierno ofreció desde sus inicios pagar la deuda social 1989 fue declarado como el año del pago de esa deuda. Durante esta administración se abrió la posibilidad de convertir deuda externa para inversiones en el campo social, hasta por un monto de 150 millones de dólares. Un mecanismo que fue instrumentado para tratar de argumentar un supuesto pago de la «deuda social».

<sup>16</sup>Esta acción del Estado, que fue más notoria en el campo hidrocarburífero, ha sido presentada como un argumento para negar el continuismo neoliberal.

### ***Otro accidente histórico***

Parecería ser que en Ecuador se ha repetido otro «accidente histórico» de la socialdemocracia latinoamericana: en los últimos tiempos, al llegar al poder se ha visto imposibilitada de librarse de la corriente neoliberal. Y no han faltado argumentos para justificar esta actitud: los efectos de la «década perdida», el agotamiento de los anteriores patrones de reproducción del capital, la crisis del capitalismo dependiente, el proceso de reordenamiento del poder mundial, las deficientes estructuras sociales e institucionales, la pesada herencia de anteriores dictaduras militares o, en el caso concreto de Ecuador, del autoritario gobierno socialcristiano. En fin, no se ha optado por modelos alternativos debido a «la carencia de una tradición democrática, como componente de su cultura política, (que) completa el panorama de dificultades para esta 'irrealizable utopía'». <sup>17</sup>

Sin embargo, la realidad difiere de la fantasía electoral. Se ha respetado la libertad de expresión y se ha creado un ambiente de mayor tranquilidad, pero no se ha logrado sanear al aparato represivo del Estado. Los indígenas, que recibieron inicialmente muestras de una mayor apertura, han visto cerrarse el camino tras el levantamiento que protagonizaron en junio de 1990. Las relaciones con diversos grupos de la sociedad - trabajadores y empresarios, particularmente - se han entrampado entre una repetida invitación al diálogo y sucesivas arremetidas oficiales, que luego tenían que ser subsanadas para retornar a la mesa de conversaciones. Los logros internacionales, alcanzados en gran medida sobre la base de antiguas relaciones personales y partidistas del primer mandatario, tampoco han desembocado en una posición coherente. Inclusive la posibilidad de que el país, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, liderara alguna manifestación regional por la paz en el Golfo se ha visto diluida tras las desafortunadas declaraciones presidenciales una vez desencadenado el conflicto. <sup>18</sup>

Por esta política cortesana de inconfundible tufo oligárquico y sumisa ante los intereses imperiales, y ante la falta de decisión para impulsar un proyecto nacional alternativo, Ecuador desaprovechó una oportunidad histórica. Lejos de canalizar el optimismo y la expectativa de la primera hora con una movilización amplia y democrática, el Ejecutivo retomó inmediatamente la posta neoliberal utilizando un vergonzante discurso progresista, improvisó un equipo gubernamental sin ningun-

<sup>17</sup> Diego Cornejo Menacho: op. cit., pp. 9-10.

<sup>18</sup> Pocas horas antes de que se desatara la guerra en el Golfo, el doctor Borja tras afirmar que las «amenazas» de Hussein no eran sino expresiones propias de «un bravucón», pronosticó que no se produciría el conflicto bélico.

na coherencia ideológica y, lentamente, ha regresado a la inveterada práctica de la prepotencia.

Esta realidad llevó a una aparatosa derrota a la socialdemocracia y sus aliados en los comicios de junio de 1990, es decir, en medio período constitucional.

Hoy, las perspectivas son como nunca inciertas en términos de los cambios necesarios y del ansiado desarrollo. Prima la lógica de la acumulación en el marco de una concepción globalizante del capital financiero internacional. Por otro lado, la agudización de los conflictos, su explosión inorgánica y su radicalización en medio de un creciente descontento, pueden afectar esta «democracia restringida»<sup>19</sup>. Aún antes de que concluya este experimento socialdemócrata, se puede avizorar el riesgo inminente de que se reediten anteriores populismos o aun gobiernos de extrema derecha porque, al menos por ahora, no parece haber fuerzas políticas capaces de impulsar ninguna alternativa real para enfrentar los grandes retos de fin de siglo.

\*Con este término definió Eloy Alfaro al problema de la deuda externa en el siglo XIX, en su folleto «Deuda Gordiana», segunda edición, Imprenta Nacional, Quito, 1896. Sobre este problema cf. Alberto Acosta: La deuda eterna - Una historia de la deuda externa ecuatoriana, Editorial «El Duende», Quito, 1990.

### **Referencias**

\*Acosta, Alberto,

\*Acosta, Alberto, Quito, Ecuador, CAAP. 1990;

\*Borja, Rodrigo,

\*Cornejo-Menacho, Diego, Quito, Ecuador, Editorial El Duende. 1990; Dos años de gobierno de Borja - Los límites del continuismo.

\*Cueva, Agustín,

\*DOCUMENTO DE TRABAJO. 3. p17-27, Quito, Ecuador, CAAP. 1990; Dos años de gobierno de Borja - Cortesanos en palacio.

\*LA DEUDA ETERNA - UNA HISTORIA DE LA DEUDA EXTERNA ECUATORIANA., Quito, Ecuador, Planeta Letraviva. 1988;

\*LAS DEMOCRACIAS RESTRINGIDAS DE AMERICA LATINA - ELEMENTOS PARA UNA REFLEXION CRITICA.

\*Menéndez-Carrión, Amparo, Quito, Ecuador, FLACSO. 1988; La democracia en el Ecuador: desafíos, dilemas y perspectivas.

---

<sup>19</sup>Entendida en los términos en los que la definió Agustín Cueva: Las democracias restringidas de América Latina - Elementos para una reflexión crítica, Planeta Letraviva, Quito, 1988.

\*MENSAJE DE PAZ Y UNIDAD. 10/08. p30-32,

\*REVISTA ECUADOR DEBATE. p7, 9-10, Quito, Ecuador. 1988;

\*REVISTA ECUADOR DEBATE.,